

ANA MORENO

DIRECTORA DESARROLLO DE NEGOCIO SECTOR PÚBLICO DE SAS ESPAÑA

El reto de mejorar los resultados y la eficiencia en la lucha contra el fraude

Aunque no existen datos oficiales del fraude en el sector público en España, es una realidad que éste afecta a distintos ámbitos como el de los impuestos, las ayudas y subsidios, las subvenciones o los procesos de contratación, y que afecta tanto a la administración central, como a la regional y local, costando a éstas millones de euros cada año.

Dicen que las crisis agudizan el ingenio y los defraudadores no se quedan atrás en este caso. Las formas de defraudar cambian con los tiempos y se vuelven cada vez más sofisticadas, intentando eludir los sistemas existentes de detección tanto de organismos públicos como privados.

Al amparo de la crisis económica han surgido nuevas fórmulas de fraude encaminadas, por ejemplo, al cobro de ayudas y subvenciones sin cumplir los requisitos necesarios y se ha incrementado el fraude fiscal con nuevas y más sofisticadas técnicas delictivas.

El fraude, en todas sus vertientes, es un delito y como tal es obligación de las administraciones públicas perseguirlo y combatirlo con todas las herramientas a su alcance. A este imperativo de combatir el delito se une, ahora más que nunca, la necesidad que tienen las administraciones pú-



blicas de recaudar e incrementar sus ingresos. En ese afán, recuperar fondos y ahorrar costes del gasto que supone el fraude, puede ser una buena fuente de ingresos, que puede evitar medidas más drásticas de reducción de costes o subida de impuestos, con el consecuente coste político que ello supone.

La lucha contra el fraude en las administraciones públicas, independientemente de su ámbito de actuación y tamaño, debería ser una prioridad, tanto por el hecho de perseguir un delito, como por el ahorro de costes que supone.

Luchar contra el fraude y prevenirlo no es una tarea sencilla, más cuando, como comentábamos anteriormente, las fórmulas delictivas van cambiando y sofisticándose progresivamente para no ponérselo

fácil a los investigadores. Afortunadamente, en la misma medida en que éstas evolucionan, lo hacen también algunas soluciones y herramientas para combatir el fraude.

Las soluciones de análisis avanzado para la lucha contra el fraude evolucionan constantemente al ritmo del ingenio de las redes organizadas, o incluso más rápido. La construcción de modelos predictivos, que ayudan a detectar patrones complejos de fraude, la utilización de reglas para automatizar y sistematizar el análisis de comportamientos fraudulentos ya conocidos, y el análisis de redes que permitan analizar la relación de cada caso con el resto, son algunas de las claves en las que se basa el análisis avanzado para detectar y prevenir actividades fraudulentas.

La lucha contra el fraude en los organismos públicos se enfrenta, además, como en muchas otras áreas, al reto de la eficiencia y de la consecución de resultados sin disminuir la calidad del servicio al ciudadano.

En ese sentido, se hace necesario priorizar la asignación de recursos para la inspección a aquellas acciones con mayor probabilidad de éxito, de forma que, utilizando el mismo número de recursos de inspección, se recaude lo máximo posible. Detectar el fraude lo antes posible en el proceso, evaluar el coste frente al retorno de la acción, e incluso tener la capacidad de adelantarse al defraudador pasando a un enfoque activo y predictivo debe ser otra de las prioridades a la hora de implantar soluciones antifraude.

La tecnología y la utilización de soluciones analíticas avanzadas para el análisis de información, capaces de descubrir patrones de comportamiento en grandes volúmenes de

información, y que pueden calcular una propensión al fraude de cada uno de los casos a investigar, son esenciales para conseguir todos estos nuevos retos.

Aunque estemos en época de recortes presupuestarios, la implementación de este tipo de soluciones asegura los incrementos del fraude detectado y las mejoras en la eficiencia del proceso de investigación y es una inversión con un retorno medido y probado en algunos organismos públicos españoles, así como en organismos públicos de todo el mundo, para la detección de diferentes tipologías de fraude: fiscal, ayudas sociales, subvenciones y prestaciones, o bajas médicas.

Si se trata de combatir actividades delictivas, a la vez que incrementar la recaudación de las administraciones públicas y ahorrar costes, parece claro que la apuesta por la lucha contra el fraude debe ser una prioridad de todas las administraciones. Las herramientas para combatir el fraude están ahí, el reto es utilizarlas y mejorar así los resultados y la eficiencia en pro de un mejor servicio al ciudadano que no defrauda, que afortunadamente, sigue siendo mayoría. 🇪🇺

Más información en:
<http://www.sas.com/offices/europe/spain/>